



La pobreza afecta al 52 por ciento de la población peruana. El 20 por ciento de ésta vive en condiciones de pobreza extrema.

¿La política del subsidio o el subsidio de la política?

Nadie podría oponerse a cualquier tipo de ayuda para los más pobres del país. Pero no hay duda de que la propuesta de subsidio directo que viene del Gobierno en las actuales circunstancias merece un debate. Hay que tomarle la palabra en todo lo que sea poner el tema de la pobreza en la agenda pública, y exigirle que se traduzca en medidas concretas, pero evitando todo lo que, sabemos, pudiese ocurrir en el camino y las consecuencias que esto podría traer. Presentamos artículos de tres expertos en la materia, con posiciones distintas.

Pro-Perú: Todavía a la deriva

carlos
monge

Grupo Propuesta Ciudadana

El descubrimiento de que el Gobierno estaba alistando el lanzamiento de un nuevo programa social, Pro Perú, ha generado un debate nacional en torno de la pertinencia de la nueva propuesta y de los programas sociales en general,

así como de las causas y posibles soluciones a la existencia misma de la pobreza.

Se han expuesto ya muchos argumentos para explicar las limitaciones de la propuesta y muchas sugerencias sobre cómo

superarlas. Repasemos algunos de ellos.

Primero, la propuesta es electorera, pues se diseña y lanza precipitadamente como parte del ingreso del Gobierno (del partido de Gobierno) a la

coyuntura electoral. Hubiese sido mejor que se ponga en práctica al inicio del Gobierno (cuando se lanzaron A Trabajar Urbano y A Trabajar Rural), o que el Gobierno la diseñe y ensaye ahora algunos pilotos, dejando su implementación masiva al que asuma en el 2006.

Segundo, la propuesta tiene serias limitaciones de diseño, pues no se la ha preparado adecuadamente. No se sabe cómo llegará el dinero a las familias más pobres, a las localidades donde no hay ni bancos ni cuentas de ahorro ni nada que se les parezca. Ni cómo se identificará a las familias más pobres cuando todas las focalizaciones previas en el Perú han sido por distrito o 'autofocalizaciones' colectivas desde la propia población. Ni cómo se controlará que estas familias efectivamente lleven a sus hijos al colegio y a las vacunaciones y que las mujeres gestantes asistan a sus controles médicos.

Tercero, aparecen algunas objeciones más de fondo. Mencionamos tres de ellas. El programa busca estimular una demanda por servicios de educación y salud al condicionar la entrega del recurso a la asistencia a colegios y postas médicas, cuando el verdadero problema es la falta de oferta. No tiene mucho sentido incentivar a los niños y niñas a que asistan a colegios en los que no hay profesores o a postas en las que no hay vacunas. Luego, el programa desarrollará lazos bilaterales entre las familias y el Gobierno, sin estimular procesos de organización que fortalezcan el tejido social local.

Finalmente, el programa no señala con claridad las funciones de las municipalidades, lo que puede debilitar esa misma institucionalidad local que se está buscando fortalecer con la descentralización.

Habría pues que preocuparse por mejorar en cantidad y calidad la oferta de servicios básicos de educación y salud para los más pobres, por qué estrategias de organización de los beneficiarios se pueden lanzar para reforzar el tejido social local, y asignar funciones claras a las municipalidades en la gestión y supervisión del nuevo programa.

Cuarto, el nuevo programa refuerza la equivocada idea de que la pobreza se solucionará mediante este u otros programas sociales. Nunca estará de más insistir en que esto es falso. La pobreza consiste en no tener empleos e ingresos suficientes para —al menos— comer, vestirse, alojarse y educarse dignamente. Los programas sociales pueden ayudar a dotar a localidades pobres de alguna infraestructura básica, brindar a las familias pobres un complemento a sus esfuerzos a la hora de alimentarse, o entregar a los niños alimentos para enfrentar el riesgo de la desnutrición. Pero no pueden crear empleos sostenibles

que permitan acceder de manera sostenible a ingresos decentes.

La solución permanente a la pobreza pasa por cambiar el manejo macroeconómico, estimulando el consumo interno y la inversión generadora de empleo sostenible, en lugar de seguir soñando con algún goteo o 'chorreo' de la promoción de grandes inversiones que no generan empleo, no demandan bienes ni servicios locales, no producen un aporte fiscal que corresponda a sus ganancias, ni quieren —como los mineros— compensar con regalías los recursos no renovables que se llevan.

La solución permanente a la pobreza pasa también por invertir masivamente en educación y salud de calidad para



Ernesto Jiménez

El lanzamiento de Pro Perú ha coincidido con el reinicio de la campaña contra el Vaso de Leche, los Comedores Populares y los programas sociales en general.

Presupuesto ejecutado por el Gobierno en programas de reducción de la pobreza extrema, 1997 - 2003

(Millones de nuevos soles corrientes)

Unidad ejecutora / actividad	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total	2 893	2 637	3 257	3 043	2 986	2 840	2 988
Apoyo social	814	919	1 321	1 291	1 100	1 212	1 644
I. Ministerio de Economía y Finanzas	307	297	338	350	357	370	20
Vaso de Leche (transferencias a gobiernos locales)	265	285	305	325	332	343	0
Programas de Apoyo Social financiados con PL N° 480	42	12	33	25	25	27	20
II. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)	210	180	237	258	221	208	403
Asistencia alimentaria / Apoyo en casos de emergencia	181	157	211	233	201	182	394
Proyectos de asistencia alimentaria	29	23	26	25	20	26	9
IV. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	0	0	113	157
Programa de Emergencia Social Productiva - A Trabajar Urbano	0	0	0	0	0	113	157
VI. Ministerio de Salud	78	97	127	136	205	225	371
Fondo de Emergencia de Lucha contra las Epidemias	27	14	8	39	42	46	0
Programa de Emergencia Social Productiva A Trabajar	0	0	0	0	0	0	356

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección Nacional del Presupuesto Público.

todos. No hay manera de pensar en ser competitivos en la sociedad de la información y el conocimiento si criamos a generaciones de jóvenes semianalfabetos y malnutridos.

Y, por supuesto, mientras que estas u otras nuevas estrategias de desarrollo den frutos, habrá que mantener programas sociales para mitigar los peores efectos de la pobreza. Y estos serán mejores si se sustentan en focalizaciones serias; si se racionalizan para evitar duplicidades; si se municipalizan para ejecutarlos en cogestión y bajo vigilancia de la ciudadanía; si su gestión es transparente, libre de clientelismos y manipulaciones; y si se les dan recursos adicionales para llegar a quienes ahora no llegan.

Dicho todo lo anterior, queremos terminar apuntando dos ideas adicionales. La primera: sospecho que lo que el Gobierno y los sectores conservadores del país

realmente quieren es cerrar todos los demás programas sociales y reemplazarlos por Pro Perú. No debe de ser coincidencia que justamente cuando se propagandiza Pro Perú, se reinicia la campaña contra el Vaso de Leche, los Comedores Populares y los programas sociales en general. ¡No llegan a los más pobres! ¡Botan la plata! ¡Hay ineficiencia y corrupción!

La segunda: deberíamos poner igual entusiasmo en vigilar el gasto militar, o lo que las grandes empresas tributan (si es que tributan), o el manejo de las negociaciones financieras internacionales como la emisión de bonos y las compras y recompras de deuda. ¡Cuántos programas sociales podrían financiarse si en esos casos eliminásemos la corrupción y las prebendas de unos pocos! Ojalá todos los expertos que hoy día miran con lupa la manera como un niño de nueve años toma una leche que debería ser solamente

para su hermano de seis, se dedicasen —también— a ver cuánto se paga por un tornillo en una compra de las Fuerzas Armadas y Policiales o cuánto dejan de pagar las grandes empresas con exoneraciones, o cuánto ganan por comisiones los agentes financieros encargados de las operaciones de deuda, y cuántas escuelas y postas y cuántas raciones de comida se podrían financiar con esos recursos.

No hay duda de que combatir la ineficiencia y la corrupción en los programas sociales, como en todo gasto público, es y seguirá siendo una tarea impostergable. Pero me parece lamentable la minuciosidad con que se analiza hasta el último sol gastado en los programas sociales mientras los que tienen poder —los militares, los grandes empresarios y los grandes agentes financieros— gastan como quieren, pagan lo que quieren y cobran lo que quieren. ■

Pobreza: Problema de todos los peruanos

gastón
garatea ss.cc.

Mesa de Lucha contra la Pobreza

En estas últimas semanas, una infidencia indebida ha producido un interesante debate entre nosotros. Hemos pasado de tratar una cantidad de temas secundarios que nos han entretenido a uno que es central en la vida de los peruanos: el de los pobres.

El Gobierno tiene planificado lanzar un programa de subsidios condicionados para las personas y familias que viven en extrema pobreza. Se quiere repartir 100 nuevos soles mensuales a las personas que cumplan determinados requisitos relacionados con la salud, la educación y la nutrición.

Se ha dicho que, al igual que en otros países que han alcanzado éxitos en programas semejantes, se les entregará a las madres de familia el dinero, pues hay conciencia de que las mujeres gastan ese dinero de mejor manera que los varones.

No han faltado, por supuesto, opiniones de todo tipo y, como ya se dijo, se ha producido un buen debate nacional. Me parece que tenemos que alegrarnos de que el tema de los pobres haya salido a la luz pública; sin embargo, han surgido también opiniones peligrosas que muestran un interés político que se ubica por encima de la urgencia que tienen los pobres de ser atendidos.

Es verdad que el programa nos ha sorprendido a muchos de quienes nos hubiese gustado otro tipo de programas, pero hay que reconocer que a medida que se va estudiando la experiencia de los países que tienen este

tipo de programas las cosas se ven cada vez mejor.

Observamos, sin embargo, muchos problemas por delante, y quisiéramos ayudar para que los pobres puedan aliviar su situación y subsanar deficiencias con las que comienzan la vida. Según nos informan aquellos con quienes hemos tomado contacto y están viendo de cerca el programa, aún hay cosas que no están claras, pero que tienen que aclararse con prontitud.

Quisiéramos decir que nos interesa que las poblaciones rurales tengan la preferencia, especialmente las que fueron golpeadas por la violencia armada de las dos décadas espantosas que hemos vivido los peruanos. La deuda humana que tenemos todos los peruanos con esos hermanos es muy grande y está lejos de ser saldada. Los pobres de nuestros campos son la mayoría de los que se encuentran en extrema pobreza.

Creemos que el Gobierno tiene que cuidar que este programa no se convierta en una humillación más para los que sufren una cantidad de deficiencias, sino que se está haciendo justicia con ellos a quienes el Estado y la sociedad han dejado sin ninguna protección.

[...] nos interesa que las poblaciones rurales tengan la preferencia, sobre todo las que fueron golpeadas por la violencia armada.

La pregunta de muchos va por el lado del dinero, y es aquí donde me parece que el asunto puede estallar de mala forma. Se dice: ¿cómo se va a poder hacer un programa de este tipo si no tenemos dinero? Lo curioso es que la pregunta se hace justo cuando se discute si determinadas personas reciben catorce o dieciséis sueldos. El dinero se tiene que sacar de donde sea, como se ha hecho con otros subsidios. Hay que saber repartir con justicia.

Los criterios nos fallan. Se discute si los extremadamente pobres reciben o no 100 nuevos soles. Se sabe que muchos de los lugares donde viven los pobres pueden o no ofrecer los servicios por los que se condiciona el subsidio, es decir, si hay o no centro de salud, colegios en buenas condiciones, o si reciben o no las ayudas nutricionales correspondientes.

¿No se siente la injusticia que significa que haya gente que nace en el Perú en condiciones de pobreza, que está condenada a vivir toda su vida en esas mismas condiciones y que seguramente morirá en el desamparo más absoluto?

Si se aplica este programa entre nosotros, ojalá que todos ayudemos a que salga bien, a que se tomen todas las cautelas necesarias, a que se ubique bien a los pobres extremos, a que no se pierda el dinero en burocracias inútiles, a que haya una comisión de transparencia y ética que ejerza su función y un mecanismo de vigilancia en el

que intervengan diferentes instituciones que puedan dar testimonio de un trabajo justo y verdaderamente en favor de los pobres. Es decir, tenemos que saber que en nuestra tierra no siempre las cosas funcionan como deben, y que es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para favorecer a los más pobres. No solo a los pobres, sino a los más pobres.

Me parece que no basta presentar el programa sino que hay que explicarle a toda la población el sentido de lo que se quiere hacer, pues de lo contrario no se obtendrán los resultados verdaderamente humanos que

debe producir un esfuerzo nacional de este tipo. El tema de los pobres es un problema de todos los peruanos. Los pobres sufren los efectos de un olvido secular. Otros producen la pobreza. Otros miran de lejos. Otros se quieren sentir pobres y en verdad no lo son: lo que buscan es aprovecharse de lo que en verdad no les corresponde.

Las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza no pueden mantenerse como simples espectadoras; humildemente, tienen que reconocer que sus posibilidades son limitadas, pero que si conciertan con otras instituciones pueden y

deben ayudar en la ubicación de las familias de extrema pobreza, la transparencia, la ética y la vigilancia del programa.

Queremos pedirle al Gobierno que el programa se haga sin apuros, con el piloto indispensable para saber corregir lo que deba ser corregido, que se consulte con la gente que está trabajando en los temas sociales, y que se tengan los ojos bien abiertos para ir corrigiendo no solo el programa en función de su avance sino también los otros programas sociales que van a mostrar sus debilidades y fracasos, y también sus logros reales. ■

Un primer paso hacia la dignidad

ramón barúa / inés barúa

Empresario / Estudiante de Periodismo

En el Perú, las estadísticas señalan que más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, una realidad sin duda poco alentadora. Pero más desalentador aun resulta conocer que el 20 por ciento de la población del Perú, casi la mitad de nuestros pobres, viven en extrema pobreza. Estos, aproximadamente 5 millones de peruanos, nacieron, viven y, se prevé, morirán sin la capacidad de acceder a indicadores satisfactorios en salud y alimentación.

Al encontrarnos en medio de esta situación, no se puede dejar de sentir un impulso a

actuar de inmediato, y es allí cuando, por inercia, uno voltea a mirar al Estado que, finalmente, debe encontrar la solución a este dramático escenario con carácter prioritario. Es en este contexto que el actual Gobierno ha creado un programa asistencial dirigido hacia los pobres extremos denominado Pro Perú.

Entendemos que el programa está basado en una relación entre el Estado y los pobladores de carácter recíproco. Esta relación ofrece a quienes se encuentran en situación de pobreza extrema la posibilidad de recibir 100 nuevos soles mensuales a cambio de que asuman la obligación de vacunar

a sus hijos y de asegurar que estos acudan al colegio. El plan es, en definitiva, una idea sencilla que ofrecería una solución relativamente inmediata a los peruanos más pobres para cubrir sus necesidades elementales.

No obstante, consideramos que antes de embarcarnos en este programa, sería bastante más útil orientar el esfuerzo a las generaciones que anteceden a estos niños. Con esto queremos decir que se debe aprovechar la oportunidad de generar una suerte de responsabilidad en los jefes de familia a los que, en vez de ofrecerles un dinero a cambio de algo relativamente sencillo,

se les debería otorgar una remuneración por un trabajo en una obra comunal identificada y priorizada por la propia comunidad. Si ya se cuenta con la decisión política y con el financiamiento para otorgarles 100 nuevos soles a familias que viven en extrema pobreza, que se aproveche la mano de obra de los beneficiarios para convertirlos en personas capaces de contribuir al desarrollo de su

comunidad. Así, creemos que el país no solo se beneficiará a largo plazo con jóvenes educados y sanos, sino, a la vez, con ciudadanos que ganen un salario con dignidad y que se sientan miembros activos de su desarrollo, lo que, además, otorgaría mayor bienestar a las comunidades y estimularía el instinto de superación, clave para el desarrollo humano del país.

Empero, es necesario poner la idea de Pro Perú en práctica de inmediato tomando en cuenta el factor tiempo y la gravedad de las cifras expuestas líneas arriba. Pero en concordancia con ello, sería necesario también establecer tres puntos básicos que garanticen el buen funcionamiento del programa.

En primer lugar, es fundamental que se defina correctamente el "público objetivo" al que va dirigido el programa. En el Perú, es difícil identificar a los más pobres de los pobres, pero por lo menos en un inicio es primordial hacer el esfuerzo. Para ello, el programa podría ejecutarse



El anuncio del subsidio de 100 soles se hace en un año electoral. Parece que ha llegado el momento de regalar pescado.

primero y con carácter experimental en las seis provincias más pobres del Perú, en las que cerca de 90 por ciento de los pobladores vive en extrema pobreza, con lo que se garantiza que el programa se hará efectivo en favor de quienes más lo requieren.

Hilando con la idea anterior, está la posibilidad de no aplicar el plan en Lima Metropolitana, donde, si bien existe pobreza extrema, el plan podría utilizarse como una herramienta que contribuya con la descentralización. Ello motivaría a muchos peruanos a regresar a sus lugares de origen y traería mayor movimiento económico a las provincias más olvidadas del territorio nacional.

Como segundo punto, sería necesario que el programa Pro Perú sea administrado por una institución que califique por su eficiencia e independencia. Creemos que las iglesias del Perú serían las instituciones más indicadas para ello, dada su cotidiana tarea de colaborar con los más pobres en la forma que

cada familia más lo requiera (alimentos, medicinas, vestido, dinero o una combinación de ellos).

En tercer lugar, sugerimos que el programa sea fiscalizado por una empresa auditora de prestigio, con lo cual se garantizaría la indispensable transparencia con que se tiene que llevar a cabo. Sería conveniente, igualmente, que la empresa encargada emita y publique informes mensuales en los que se dé cuenta de los fondos utilizados y se vaya controlando la marcha del plan.

Para terminar, queremos resaltar la oportunidad que representa implementar un plan como este en la construcción de una mejor sociedad. Poner a los pobres del Perú en el centro de nuestras discusiones y preocupaciones y ofrecer alternativas de solución (aunque de inicio sean solo asistenciales), es el primer paso de un largo camino que todo país debe recorrer para contar con ciudadanos dignos y sociedades estables. ■